

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

Demandante	GILBERTO ANTONIO AGUDELO VÉLEZ, MANUEL SALVADOR AGUDELO VELASQUEZ Y OTROS
Demandados	GRUPO ARGOS S. A, FABRICATO S. A, COLTEJER S.A. Y CEMENTOS ARGOS S.A.
Tipo de proceso	Ordinario
Radicado Nacional	05-001-31-05-010-2015-01276-01
Instancia	Segunda
Providencia	Interlocutorio 25 de 2023
Tema y subtema	Medida cautelar Art 85A
Decisión	Confirma

En la fecha, **veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a desatar el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de los demandantes, contra el auto proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito, el 2 de marzo del año en curso, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Gilberto Antonio Agudelo Vélez, Manuel Salvador Agudelo Velásquez y Otros**, en contra de **Grupo Argos S.A., Fabricato S.A., Coltejer S.A. y Cementos Argos S.A.**, radicado número 05001 3105 **010 2015 01276 01**.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que los demandantes convocaron a juicio a las sociedades accionadas pretendiendo el reconocimiento y pago, en forma solidaria y a prorrata de su participación accionaria, de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dejados de cancelar por las 83.5 mesadas, desde

septiembre de 2003 hasta su desembolso efectivo. En forma subsidiaria la liquidación de tales intereses sobre la diferencia entre el valor de las mesadas a 2003 y el valor de la pensión actualizada al mismo año, o en su defecto la indexación sobre los dineros dejados de sufragar por aquellas mesadas desde octubre de 2003 hasta el reconocimiento efectivo. (Archivo 03 Expediente completo págs. 133-141).

Una vez admitida la demanda, debidamente notificada y oportunamente contestada, la apoderada judicial de la parte demandante, solicitó decretar la medida cautelar dispuesta en el artículo 85 A del C.P.T y de la S.S, en los siguientes términos:

*"(...) solicito a ese despacho, se sirva decretar como **MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA** a la codemandada COLTEJER S.A., consistente en prestar **CAUCION** real o bancaria o por compañía de seguros, como su señoría lo encuentre más razonable, considerando la teleología de la medida creada por el Legislador, es decir, en razón de su necesidad, efectividad, razonabilidad y proporcionalidad, como necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial.*

*Lo anterior, teniendo en consideración la actual situación que está atravesando dicha Empresa, tal como aparece en las publicaciones de prensa y que han sido dadas a conocer en los siguientes links de noticias digitales, entre otros, el día **17 de enero de 2023**, lo cual permite afirmar que estamos ante un HECHO NUEVO y por demás, que constituyen **PRUEBA** para ser considerado como un HECHO NOTORIO:*

1.<https://www.elespectador.com/economia/moda-eindustria/coltejer-termino-los-ultimos-contratos-detraabajo-y-sigue-con-venta-de-inmuebles/>

2.<https://www.elcolombiano.com/negocios/coltejerliquida-a-sus-ultimos-cinco-empleados-PC20115596>.

*A su vez, teniendo en cuenta que, conforme la **Sentencia C-043 de febrero 25 de 2021 (M. P. Cristina Pardo Schlesinger)**, son aplicables a los procesos ordinarios laborales las medidas cautelares establecidas en el **literal c) del No. 1º del artículo 590 de la Ley 1564 de 2012 (CGP)**, al condicionar la exequibilidad del artículo 37A de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo (CPT), en concordancia con lo establecido por el Art. 11 del CGP.*

Dicha solicitud se hace, ante la existencia de una amenaza de vulneración de los derechos a la seguridad social de los pensionados como sujetos de especial protección constitucional y con el objeto de proteger los derechos litigiosos de suyos y de sus sustitutos, buscando así asegurar la efectividad de las pretensiones de la demanda, para que, de esta manera, como señala la H. Corte Constitucional: "...una eventual sentencia favorable pueda cumplirse y el derecho no sea solo reconocido formalmente, sino que consiga ejercerse materialmente (...) Tiene igualmente que ver con un temor fundado

*de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso". Esto es, ante la situación notoriamente conocida de lo cual arrimo la PRUEBA, deberá atenderse el fumus boni iuris (o apariencia de buen derecho), y que en la realidad exista su posibilidad de aplicación, junto a la consideración de periculum in mora, frente a la necesidad de resolución final en el tiempo, para que mientras dura el trámite del proceso en la judicatura, la decisión que recaiga pueda ser cumplida y llevada a efecto firmemente, siendo necesario recabar en que, no basta con que hayan sido **ASUMIDOS** los PENSIONADOS DE COLTEJER por dicha Empresa, sino que debe cubrirse la **CONMUTACION PENSIONAL** que no se ha hecho, en razón a que al ser **INCORPORADOS** conforme lo dispuesto por el **Art. 40 del D.R. 692 de 1994**, reglamentario de la Ley 100 de 1993, en su condición de PENSIONADOS O SUS SUTITUTAS, reitero, no se ha hecho realidad tal incorporación, al no ser ingresados al SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, lo que se evidencia por ser directamente la Empresa COLTEJER S.A. la que viene cancelando las mesadas y no a través de un Fondo de Pensiones como lo es COLPENSIONES, que son los únicos que pueden manejar esos RECURSOS PARAFISCALES"*

Posteriormente, la apoderada de la parte activa presentó ESTADOS FINANCIEROS de COLTEJER, con corte a junio 30 - 2022 y comparativos con diciembre 31 de 2021, y otra noticia digital, como pruebas para soportar su solicitud (archivo 143 pdf. Prueba para audiencia)

El 2 de marzo del año en curso se llevó a cabo audiencia pública para decidir sobre la medida cautelar, y luego de escuchar a cada una de las partes y examinar el material probatorio aportado, conforme a lo dispuesto en el artículo 85A, el juez de la causa la **negó**, argumentando que, si bien, conforme a la sentencia C-043-2021 se amplió la gama de posibles cautelas, la Corte no varió el contenido del artículo 85A, luego, para su procedencia en el proceso ordinario laboral, la parte activa debe acreditar que la demandada se encuentra efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o se halla en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, y para ello la parte actora aporta unos estados financieros y artículos de periódicos, documentos de los cuales no pueden extraerse los supuestos de hecho de la norma, pues la empresa sigue vigente y no se encuentra en proceso de liquidación, luego no es cierto que no pueda asumir sus obligaciones, máxime que es normal en las economías como la Colombiana, que en una compañía decrezca en sus ingresos y aumente sus costos, pero

ello por sí solo no acredita que la sociedad esté ejecutando actos tendientes a insolventarse.

Precisando que si bien, el juzgado debe observar lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, como lo refiere la abogada de la parte demandante, la carga dinámica de la prueba tiene aplicación respecto a los derechos debatidos, no para la imposición de medidas cautelares, pues existe disposición especial que es el artículo 85 A, en el que se determina que es el interesado quien debe ofrecer los medios de convicción acerca de la situación alegada.

Inconforme con la decisión, **la apoderada de los demandantes interpuso el recurso de apelación**, manifestando ser evidente que la empresa no está operando, por lo tanto, no le están ingresando los recursos necesarios, y que si la empresa matriz Kaltex, está contribuyendo, ese dinero es precisamente de la matriz, sociedad que no está aportado de manera gratuita, sino porque está haciendo préstamos a Coltejer, conforme a los estados financieros.

Agrega que si no es suficiente lo anterior, se debe tener en cuenta que la prueba presentada como indicio, son notas periodísticas digitales que han sido considerados como hechos notorios incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “ *En relación con los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal considera que pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios...* (Caso Escué Zapata Vs. Colombia Sentencia de 4 de julio de 2007)”

Expone que además, el que el despacho no puede desconocer las pruebas que obran en el expediente, que las obligaciones de las accionadas para con los demandantes están relacionadas con derechos fundamentales como la seguridad social y el trabajo, por lo cual, basándose en el principio de

precaución, para lograr la materialización efectiva de la pretensión debe decretarse la medida, pues hay una amenaza a la vulneración a los derechos de sus representados, por lo que se debe dar credibilidad a los artículos prensa, pues el artículo 20 de la Constitución Política exige a los medios la veracidad comprobada, luego, lo allí vertido no es una mera especulación.

Finalmente, relata que el predominio de la matriz es una apariencia de buen derecho, pero desde 1997 se han venido desconociendo obligaciones y solo a través de la Corte Constitucional se logró un pago parcial, por lo que no pueden olvidarse las dificultades de la compañía, y en esa medida, conforme al artículo 11 del Código General del Proceso, se debe propender por la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, luego el juez debe advertir que la presencia de los anuncios ya muestran la dificultad notoria de la sociedad, y por eso debe acceder a lo solicitado.

Al encontrarse debidamente sustentado el recurso, se concedió y remitió a esta instancia.

Del **traslado para alegar**, hizo uso **la apoderada de la parte demandante** solicita revocar la decisión reiterando los argumentos expuesto en su recurso, enfatizando que la medida cautelar solicitada obedece a las publicaciones, ya presentadas a estudio del *a quo*, evidenciándose un hecho nuevo que por demás, constituyen prueba para ser considerada, porque si bien las informaciones de prensa no pueden ser valoradas probatoriamente para dar fe de los hechos, si exigen del juez no apartarse de la realidad o contexto que estas reflejan, más aún cuando estas permiten evidenciar un **hecho notorio** como el que se ha venido advirtiendo en la prensa nacional, no solo en los link informado, Sino también, en los más recientemente publicados en abril 12 y 13 de 2023, respectivamente: <https://www.elcolombiano.com/negocios/revisor->

[fiscalduda-de-que-coltejer-se-pueda-salvar-GL21085416,y](#)

[https://www.portafolio.co/negocios/empresas/coltejer-seguira-funcionando-pero-quiere-enfocar-su-oferta-en-articulos-para-el-hogar-581376.](#)

De otro lado, transcribe a partes de la sentencia SL956-2022, recalcando la primacía del derecho sustancial, seguidamente, insistiendo en lo manifestado en su recurso, señala que el Juez laboral, como director del proceso, apartándose de tanto formalismo, ante la dificultad de la parte actora de poder aportar una prueba directa de lo que afirma, debe dar aplicación al principio consagrado en la norma procesal en el Art. 167 del CGP denominado carga dinámica de la prueba.

Por su parte, la apoderada judicial **de Coltejer** solicitó confirmar la decisión en la medida que si bien era cierto y de público conocimiento que su representada desde la pandemia no ha reiniciado sus operaciones productivas, ello no significaba que no recibiera ingresos; que tanto a las autoridades, Superintendencia Financiera de Colombia y las judiciales, se les ha informado que Coltejer tiene en arrendamiento algunos de sus activos y dentro de sus proyecciones futuras, esta una línea de negocio que permitirá crecer los ingresos en el mediano plazo; que a la fecha la empresa no presenta ningún embargo por incumplimiento de obligaciones legales, contractuales ni financieras. Todas y cada una de las sentencias condenatorias, así como las conciliaciones extra y judiciales, se han cumplido a cabalidad.

Agregó que activos de Coltejer y esto es de público conocimiento con los reportes financieros presentados trimestralmente a la Superintendencia Financiera, no solo están ubicados en Itagüí; también se cuenta con un complejo industrial en el Municipio de Rionegro con más de 500 mil metros de terreno, otros activos no productivos en otras ciudades, además de la maquinaria de producción que se encuentra debidamente custodiada; que

en el evento hasta ahora improbable de una liquidación de la sociedad, este proceso judicial, al igual que los demás, están registrados en la contabilidad de Coltejer, como contingencias, las cuales se pagarán con los bienes que se liquiden o se adjudicará al accionista que tenga posibilidades financieras de asumir la obligación.

Precisa que la apoderada de la parte demandante basa su solicitud en las publicaciones de prensa, las cuales no son más que interpretaciones con tinte amarillista para vender, las cuales contienen afirmaciones lejanas a la realidad, como la última de ellas relacionada con un concepto de la revisoría fiscal que contiene aspectos puramente contables y fiscales

Finalmente manifiesta que la mención que hace la apoderada de la parte demandante en sus alegatos, carece de fundamento alguno, pues la figura de la inscripción o cancelación de las acciones en el registro nacional de valores, nada tiene que ver con la situación financiera de una empresa, esto tiene únicamente que ver con la posibilidad o no de negociar las acciones a través de la Bolsa de Valores y las acciones de Coltejer tienen muy baja bursatilidad por lo que esta figura se hace innecesaria, solo produciendo gastos ante la Bolsa de Valores y ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Teniendo en cuenta la decisión adoptada y la inconformidad de la recurrente, debe indicarse que la imposición de la medida cautelar en materia laboral, está consagrada en el artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, el cual establece:

*"ARTICULO 85A. Medida cautelar en proceso ordinario. Cuando el demandado, en juicio ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, **o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.***

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden."

Dicha preceptiva fue declarada exequible de forma condicionada por la sentencia C-043 de 2021, al examinar el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, en el entendido que en asuntos laborales pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal c) del numeral 1º del artículo 590 del Código General del Proceso.

Igualmente, la jurisprudencia al respecto prevé que al juez le corresponde decidir en cada caso concreto sobre su procedencia y su extensión, así como verificar el cumplimiento de los requisitos de ley; la Corte en la sentencia C-490 de 2000 menciona que es **necesario para determinar la imposición de la caución que el demandante aporte un principio de prueba que este fundada al menos en apariencia y que haya un peligro o riesgo de que el derecho pretendido pueda verse afectado por el tiempo transcurrido en el trámite del proceso**, luego lo que justifica estas medidas es la existencia de un peligro, de daño jurídico derivado del retardo de la providencia jurisdiccional definitiva. Y, ante todo, la protección de la igualdad de las partes y la garantía de la eficacia de la administración de justicia.

De acuerdo con ello, puede decirse que con dichas medidas lo que se busca es asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte en el desarrollo de un proceso judicial, esto es, impedir la destrucción o afectación de los derechos controvertidos, y así evitar que las sentencias se conviertan en meras ilusiones, pues de no establecerse tales cautelas, en ocasiones no se podría asegurar el cumplimiento de las mismas, lo que equivale a la tutela judicial efectiva, fin último de las acciones judiciales.

Conforme a la norma antes transcrita y para lo que interesa al caso planteado, la medida procede cuando el demandado o los demandados: **i)** están efectuando actos tendientes a insolventarse, **ii)** llevan a cabo actos tendientes a impedir el cumplimiento de la sentencia o, **iii)** se encuentran en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Obviamente, cualquiera de los eventos previstos debe estar **plenamente acreditado para que el juez puede imponerla**.

Nótese igualmente que el canon también establece que, ***Cuando el juez considere que el demandado*** se encuentra inmerso en las situaciones planteadas anteriormente, puede decretar la caución, aspecto que pone de manifiesto que es el funcionario, quien, una vez valoradas las pruebas, tiene la posibilidad de considerar, si las dificultades que afronta el demandado revisten o no el carácter de gravedad o seriedad, exigidos para la procedencia de la cautela.

De acuerdo con lo esbozado, considera esta Sala que en el caso concreto no se acredita ***una situación tal que le impida a la sociedad Coltejer S.A. en la actualidad cumplir oportunamente con las eventuales obligaciones que se le puedan imponer en este trámite***, siendo esta la causal que plantea la recurrente, para lo cual aporta como pruebas, artículos publicados por medios de comunicación digital y los estados financieros a 31 de diciembre de 2022, y ello porque, los artículos publicados en la web: <https://www.elespectador.com/economia/moda-e-industria/coltejer->

[termino-los-ultimos-contratos-de-trabajo-y-sigue-con-venta-de-inmuebles/,
https://www.elcolombiano.com/negocios/coltejer-liquida-a-sus-ultimos-
cinco-empleados-pc20115596,](https://www.elcolombiano.com/negocios/coltejer-liquida-a-sus-ultimos-cinco-empleados-pc20115596)

y

[https://www.larepublica.co/empresas/ingresos-de-coltejer-llegaron-a-40-
375-millones-y-la-perdida-neta-fue-de-137-201-millones-3563762,](https://www.larepublica.co/empresas/ingresos-de-coltejer-llegaron-a-40-375-millones-y-la-perdida-neta-fue-de-137-201-millones-3563762)

[https://www.elcolombiano.com/negocios/revisor-fiscalduda-de-que-coltejer-
se-pueda-salvar-GL21085416,y](https://www.elcolombiano.com/negocios/revisor-fiscalduda-de-que-coltejer-se-pueda-salvar-GL21085416)

[https://www.portafolio.co/negocios/empresas/coltejer-seguira-funcionando-
pero-quiere-enfocar-su-oferta-en-articulos-para-el-hogar-581376,](https://www.portafolio.co/negocios/empresas/coltejer-seguira-funcionando-pero-quiere-enfocar-su-oferta-en-articulos-para-el-hogar-581376) si bien es

cierto, hacen alusión a las pérdidas de la empresa y a la finalización de contratos laborales generados con ocasión de la pandemia y a otros asuntos económicos de la empresa, también lo es, que de ellos no puede concluirse que la sociedad en la actualidad esté en una situación de tal magnitud que no pueda responder eventualmente por una condena, pues nótese que las noticias digitales incluso claramente señalan que la sociedad **"no ha tomado la decisión de liquidarse, ni disolverse, por lo que sus actividades se concentrarán en la sostenibilidad de la empresa, alivianando el pasivo y administrando los activos"**. Lo que además a la fecha está acreditado con el certificado de existencia y representación aportado, en el cual se aprecia que sigue vigente y no está incurso en trámite liquidatorio (archivo 140 pdf. págs 6-17).

Lo anterior se debe examinar en armonía con los estados financieros a 31 de diciembre de 2022, en los cuales, si bien como lo sugiere la apoderada recurrente, se observa la disminución significativa de los ingresos, el revisor fiscal explica:

*"Con base en la posición de liquidez de la Compañía a la fecha de autorización de los estados financieros, y a la luz de la incertidumbre que rodea el desarrollo futuro del brote, **la administración continúa teniendo una expectativa razonable de contar con los recursos adecuados para continuar en operación durante al menos los próximos 12 meses y que la base contable de empresa en funcionamiento sigue siendo adecuada, concluyendo que la compañía tiene continuidad en el futuro y que las estrategias de mitigación de gastos, reducción de costos y promoción de sus lotes con negociación de tierras,***

soportan controladamente los posibles resultados que se desglosan de esta contingencia.

Dentro de la expectativa razonable de continuidad, la Compañía no ha tomado la decisión de liquidarse ni disolverse, por lo que, se han realizado diversas actividades que tienen como finalidad de prolongar la Compañía buscando disminución de costos y gastos, adicional de la propuesta inmobiliaria como proyecto en el corto plazo, todo esto con el respaldo de casa matriz:

Complejo de Rionegro: Durante el año 2022 se continúa con la no producción para el sector textil, estrategias de mantenimientos preventivos de maquinaria y en el sector inmobiliario permanencia estática.

Complejo de Itagüí: Se continúa con la actividad inmobiliaria tanto en el arrendamiento de los inmuebles (bodegas) así como la promoción de venta de lotes.

Actividad inmobiliaria: se continúa con la promoción de lotes en negociación de las tierras, luego de un 2022 de cierre de venta de los mismos y cesión de zonas al Municipio de Itagüí como estrategia de modificación del PUG.

Oferta de productos: Se cuenta con estrategia de importación de telas para comercialización desde México con una regularidad de 60 días entre cada compra.

Administrativo: Se continúan con pagos de personal para garantizar la operación de la compañía, así como la conservación del nombre.

Se vienen realizando pagos regulares de impuestos, servicios públicos, proveedores, entre otros,

dándole viabilidad al ejercicio actual Laboral: Actualmente se cuentan con cuarenta y seis (46) contratos laborales, de los cuales, quince (15) se encuentran suspendidos. Se está en la búsqueda de terminación por mutuo acuerdo, pago de liquidaciones e indemnizaciones.

Con respecto a los jubilados, la compañía buscará con apoyo de su casa matriz los recursos para soportar estas obligaciones, al igual, que los procesos judiciales, atendiéndolos desde el punto de vista judicial y gestionando sus recursos una vez estos procesos estén en etapa de cobro.

Impuestos: Actualmente la Compañía cuenta con la facilidad de pago otorgada por la DIAN a Coltejer el 27 de noviembre de 2021 finalmente formalizado mediante la Resolución 20220808000326. El plazo de pago es de 60 meses a la tasa de mora para obligaciones fiscales y una cuota mensual de \$459 que aplican a capital e intereses. Este rubro se viene cancelando con recursos propios mes a mes y compensaciones de saldo a favor en renta.

Los impuestos prediales se cancelarán con los próximos recursos de la negociación de la venta de lotes realizada en 2021.

Análisis de flujo de caja: La Compañía cuenta con el flujo de caja de sus actividades inmobiliarias y de comercialización de telas importadas para soportar sus salidas de efectivo, así como el aval y apoyo de su casa matriz para suplir los demás conceptos de operatividad.

Activos fijos: Al encontrarse la maquinaria en paro productivo, la Compañía realiza trabajos de mantenimiento preventivo con la finalidad de conservarlas en condiciones de inicio una vez se comience el plan productivo.

De acuerdo a la normativa contable, se continúa con el reconocimiento de gasto por depreciación de los activos que cuentan con método de depreciación línea recta y de manera periódica y a cierre de este período fue reconocido en su totalidad el deterioro de la maquinaria producto de un avalúo técnico realizado (ver Nota 9 de propiedad, planta y equipo).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se concluye la continuidad de la compañía en los 12 meses siguientes al cierre de 2022, premisa utilizada en la preparación de los estados financieros sobre una base de negocio en marcha y no se presentan ajustes a los valores en libros y clasificación de activos, pasivos y gastos reportados que de otra manera podrían ser requeridos si la base de negocio en marcha no fuera apropiada.”

Luego a juicio de la Sala, conforme a lo acontecido hasta el momento, no puede colegirse que, en la actualidad, abril de 2023, la sociedad codemandada, Coltejer S.A., se encuentre en una situación tal que evite el cumplimiento oportuno de las eventuales obligaciones aquí pretendidas, y es que no puede olvidarse que la cautela está encaminada a que, con base en hechos concretos, se pueda verificar que en el caso particular, efectivamente, esas dificultades o esas actuaciones de insolvencia están teniendo ocurrencia y, a partir de allí, fijar las medidas para prevenir esa situación y garantizar el eventual pago al trabajador, de lo que no obra prueba, por lo que se impone la confirmación de la decisión revisada.

Finalmente, se debe advertir que, para esta calenda – abril de 2023-, estos son los elementos de juicio que se presentan y con ello es que se toma la decisión, no obstante, si los mismos varían debe procederse a su acreditación a fin de realizar nuevo estudio.

Sin costas en esta instancia, al no haberse causado. Artículo 365 – 8 del C. G. del P.

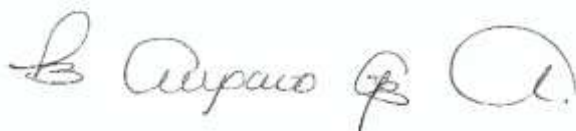
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, CONFIRMA** el auto del 2 de marzo de

2023 proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Gilberto Antonio Agudelo y otros** contra **Coltejer S.A., Grupo Argos S.A., Cementos Argos S.A. y Fabricato S.A.**

Sin costas en esta instancia. Artículo 365 – 8 del C. G. del P.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 71 del 28 de abril de 2023
consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>